

AGOSTO 18 DE 1932

52ª REUNION — SESION ESPECIAL

PRESIDENCIA DE LOS DOCTORES JUAN F. CAFFERATA Y AUGUSTO BUNGE

DIPUTADOS PRESENTES: Abalos Próspero, Acosta Abel, Agüero Santos, Ahumada Luis Alberto, Albarracín Belisario, Alonso Alfredo J., Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Antelo Mario, Aráoz José Ignacio, Argonz Joaquín, Becerra Eugenio A. (h.), Bermúdez Manuel A., Besasso Domingo, Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bordabehere Enzo, Bosano Ansaldo Daniel, Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buira Demetrio, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cafferata Juan F., Calderón Osvaldo M., Cárcano Miguel Angel, Carreras Ernesto L. de las, Carreras José, Castellanos José D., Castiglioni Eduardo, Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Colombres Carlos G., Cornejo Arias Víctor, Corominas Segura Rodolfo, Coronel Carlos, Cortés Arteaga Alberto, Costa Méndez Nicanor, Costanti Gerardo, Courel Carlos D., Da Rocha Arturo, Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Esecobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Fresco Manuel A., Frías Silva Raúl, Ganza Marcelino, Garayalde José María, Ghioldi Américo, Giménez Angel M., Giusti Roberto F., Godoy Raúl, Gómez Hernán F., González Benjamín S., González Guerrico Manuel, González Masada Manuel, González Valentín, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Guglielmelli Aquiles M., Herráiz Pascual, Herrera Bruno J., Iribarne Alberto, Lamesa Juan B., Lazo Plácido C., Lima Vicente Solano, López Héctor S., Loredó José, Loyarte Ramón G., Luján Abdón P., Maglione Francisco L., Magris Amleto, Manacorda Carlos, Mancini Rafael, Martella Julio C., Martínez Erasmo, Martínez José, Heriberto, Mattos Luis María, Mayo Ramón, Messone Ricardo N., Moreira Alejandro E., Moret Carlos (h.), Morrogh Bernard Juan F., Mosset Iurraspe Mario, Mouchet Enrique, Navello Miguel V., Nigro Juan, Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Ortiz Basualdo Samuel, Palacín José, Palacín Manuel, Palacín Pedro, Palacio Benjamín, Palmeiro José, Parera Gregorio, Pascarelli Miguel, Pena José Luis, Pereira Clodomiro, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pinedo Federico, Pomponio Vicente E., Pressacco Juan P., Pueyrredón Carlos A., Quiroga Félix, Radio Pedro, Repetto Nicolás, Rodríguez Pinto Domingo, Ruggieri Silvio L., Ruiz Guinazú Jacinto, Saggese Angel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schoo Lastra Dionisio, Sellarés Avelino, Sierra Bernardo, Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel O., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Tourrés León P., Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Vicchi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Vionnet Rodolfo L., Zarazaga Marcial J., Zerda Justiniano de la; AUSENTE, CON LICENCIA: Carús Agustín J., Contte José A., Mojina Serapio; AUSENTE, CON AVISO: Aguirrezabala Miguel A., Amadeo y Videla Daniel, Inda Rufino, Pietranera Bruno J., Simón Padrós Juan, Zalazar Altamira Benjamín; AUSENTE, SIN AVISO: Aráoz Ernesto M., Dávila Miguel B., Duhau Luis, Ferreyra Antenor R., Harispe Albino H., Mouesca Eduardo, Moyano Rodolfo, Palisa Mujica Arturo, Parodi Misael J., Pintos Angel, Rojas Marcos E., Salas José Raquel, Vignart Uberto F.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Sesión en mayoría. Acta.
- 3.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General en los proyectos de ley sobre reformas al Código de Comercio, en lo relativo a empleados de comercio.

—En Buenos Aires, a 18 de Agosto de 1932, siendo la hora 15 y 30:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Cafferata). — Señores diputados: es la hora reglamentaria y hay solamente 67 señores diputados en el recinto. En la casa hay número.

Sr. Ghioldi. — Hago indicación de que se espere media hora, señor presidente.

Sr. Presidente (Cafferata). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Uriburu. — Un cuarto de hora.

2

ACTA

—A la hora 15 y 38:

Sr. Presidente (Cafferata). — Queda abierta la sesión con asistencia de 81 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—A indicación del señor diputado Bogliolo, se omite la lectura del acta y se da por aprobada.

3

REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO

Sr. Presidente (Cafferata). — La sesión de hoy, señores diputados, está destinada, como sesión especial, a tratar el despacho de la Comisión de Legislación General contenido en la orden del día 35, sobre modificación de varios artículos del Código de Comercio, con exclusión de cualquier otro asunto.

—Se lee:

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación General ha estudiado los proyectos de ley presentados por los señores diputados Adolfo Dickmann y M. González Maseda y otros, por los cuales se reforman diversos artículos del Código de Comercio relativos a empleados de comercio; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja a vuestra honorabilidad la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícanse los artículos 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 del Código de Comercio, en la siguiente forma:

«Artículo 154. — Los empleados de comercio — factores, dependientes, viajeros, encargados u obreros — son responsables a sus

principales de cualquier daño que causen a sus intereses por malversación, negligencia o falta de exacta ejecución de sus órdenes e instrucciones; quedando sujetos, en caso de malversación, a la respectiva acción criminal.

«Es obligación del principal fijar en los locales de su negocio, en sitios bien visibles, el reglamento en que estén determinadas las obligaciones de los empleados.

«Art. 155. — Los accidentes y las enfermedades inculpables que interrumpen los servicios del empleado de comercio — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — que trabaja a sueldo, jornal, comisión, gratificación u otro modo de remuneración, sea en dinero o en especie, alimentos o uso de habitación, no le privarán del derecho a percibir dichas retribuciones hasta tres meses de interrupción si tiene una antigüedad en el servicio que no exceda de diez años, y hasta seis meses si tiene una antigüedad mayor de este último tiempo.

«La retribución mensual que en estos últimos casos corresponde al empleado, se liquidará de acuerdo con el promedio del último semestre.

«El empleado conservará su puesto y si después de los plazos de tres y seis meses indicados el principal lo despidiese, éste le pagará la indemnización de cesantía del artículo 157.

«La indemnización por accidente o enfermedad que establece el primer apartado de este artículo, no regirá para los casos previstos en la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuando por esta última corresponda al empleado una indemnización mayor.

«El derecho a la retribución en los casos de accidentes o enfermedades inculpables, no excluye el que tiene el empleado a la indemnización por los daños o pérdidas que sufra durante el servicio que presta al principal y que estará a cargo de éste.

También conservará el empleado su puesto cuando deba prestar servicio militar por llamado ordinario, movilización o convocatorias especiales.

«Art. 156. — El empleado de comercio — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual, conservando la retribución que recibe durante el servicio, liquidada de acuerdo con el artículo anterior, por los siguientes términos:

- a) Diez días, cuando la antigüedad en el servicio no excede de cinco años;
- b) Quince días, cuando siendo mayor de cinco años la antigüedad no excede de diez;
- c) Veinte días, cuando la antigüedad es mayor de diez años y no excede de veinte;
- d) Treinta días, cuando la antigüedad en el servicio es mayor de veinte años.

«Queda reservada al principal la elección de la época en que regirá el período de descanso.

«Cuando las exigencias del comercio lo impongan, la licencia continuada podrá substituirse por descansos más breves, siempre que en conjunto cubran los períodos mínimos anuales. En ningún caso se computarán en estos períodos parciales los días feriados o de descanso general.

«Art. 157. — El contrato de empleo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso o, en su defecto, indemnización, además de la que corresponderá al empleado por su antigüedad en el servicio cuando se disuelva por voluntad del principal.

«Esta regla se aplicará también en los casos de cesación o liquidación del negocio que no sean determinados exclusivamente por fuerza mayor.

«El preaviso, cuando una convención de partes no lo fija en un término mayor, deberá darse con la anticipación siguiente:

- a) De un mes, cuando el empleado — factor, dependiente, viajante, encargado u obrero — tiene en el servicio una antigüedad no mayor de cinco años;
- b) De dos meses, cuando el empleado tiene en el servicio una antigüedad que siendo mayor de cinco años no excede de diez;
- c) De tres meses, cuando esa antigüedad es mayor de diez años.

«Estos plazos correrán desde el último día del mes en que se comunica la cesantía. La notificación deberá probarse por escrito.

«En caso de cesantía sin aviso previo en los plazos señalados, el principal pagará al empleado una indemnización equivalente a la retribución que corresponde al período legal de preaviso.

«También abonará el principal al empleado, en todos los casos de despido, haya o no preaviso, una indemnización no inferior a la mitad de su retribución mensual por cada año de servicio, o fracción mayor de tres meses, tomándose como base de retribución el promedio de los últimos cinco años o de todo el tiempo del servicio cuando es inferior a aquel plazo. Para fijar el promedio se computarán como formando parte de los sueldos y salarios, las comisiones, gratificaciones u otra remuneración y todo pago hecho en especie, en provisión de alimentos o en uso de habitación. En ningún caso esta indemnización será inferior a un mes de sueldo.

«La suspensión de tareas por más de tres meses, en el período de un año, ordenada por el principal, se considerará como despido.

«La rebaja injustificada de los sueldos, salarios, comisiones, gratificaciones u otros medios de remuneración, no aceptada por los afectados, colocará a éstos en situación de despedidos y con derecho a percibir la compensación que establece este artículo.

«Cuando se produzca la cesión o cambio de firma, o cuando la precedente no haya dado el aviso previo en los plazos ya enunciados, y en los casos de suspensión de tareas o rebaja injustificada de las retribuciones, pasarán a la nueva firma las obligaciones que establecen este artículo y los dos anteriores.

«En caso de falencia del principal, el empleado tiene derecho a las indemnizaciones por falta de preaviso y por despido según antigüedad en el servicio.

«Cuando el contrato de empleo se disuelve por voluntad del empleado, éste deberá preavisar al principal en los mismos plazos de este artículo, y en su defecto pagará la indemnización que por falta de preaviso se establece para el empleador.

«Las indemnizaciones por cesantía y por falta de preaviso que corresponden al empleado no están sujetas a moratoria ni a embargo, y regirá a su respecto lo dispuesto para salarios y sueldos en el artículo 4º de la ley 11.278. Estas indemnizaciones gozarán de privilegio general sobre los bienes del deudor.

«A los efectos de la indemnización, la antigüedad en el servicio anterior a la sanción de esta ley, sólo se reconocerá hasta un límite máximo de diez años.

«En caso de muerte del empleado, el cón-

yuge, los descendientes y los ascendientes, en el orden y en la proporción que establece el Código Civil, tendrán derecho a la indemnización por antigüedad en el servicio, limitándose para los descendientes a los menores de veintidós años y sin término de edad cuando están incapacitados para el trabajo. A falta de esos parientes, serán beneficiarios de la indemnización los hermanos, si al fallecer el empleado vivían bajo su amparo, y dentro de los límites fijados para los descendientes. Se deducirá del monto de la indemnización lo que los beneficiarios recibían de sociedades de seguros por actos o contratos de previsión realizados por el principal.

«Art. 158. — Será nula y sin valor toda convención de partes que reduzca las obligaciones determinadas en los tres artículos anteriores, las que regirán también para los contratos de empleo a plazo fijo, en cuyo caso el preaviso será un mes, o dos o tres meses antes de la expiración del término convenido, según antigüedad en el servicio; considerándose que acepta la reconducción del contrato la parte que omita el preaviso.

«Cuando vencido el término expresamente estipulado en un contrato, el empleado—factor, dependiente, viajante, encargado u obrero—continúa en el trabajo, por tácita reconducción o por un nuevo contrato, se le computará el tiempo de servicio anterior para determinar los períodos de licencia anual, el plazo de preaviso o la indemnización equivalente y el monto de la indemnización por antigüedad en el trabajo, de cuyo monto se deducirá lo que ya ha recibido, por el mismo concepto, a la terminación de los precedentes contratos. A los mismos efectos y en el caso de contratos por tiempo indeterminado, se computará el tiempo anterior cuando el empleado despedido reintegrese al servicio del principal, deduciéndose de la última indemnización por antigüedad lo recibido en igual concepto por despidos anteriores.

«En caso de cesantía o de retiro voluntario del servicio, por cualquier causa, el principal estará obligado a entregar al empleado un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre su naturaleza y antigüedad en el mismo.

«Art. 159. — Se considera arbitraria la inobservancia del contrato entre el principal y su empleado, siempre que no se funde en in-

juria que haya hecho el uno a la seguridad, al honor o a los intereses del otro o de su familia.

«Esta calificación se hará prudencialmente por el tribunal o juez competente, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que median entre los superiores e inferiores.

«Art. 160. — Son causas especiales para despedir al empleado, y sin obligación para el principal de indemnizar por falta de preaviso, aunque exista contrato por tiempo determinado:

- 1º Los hechos previstos en el artículo 154 y todo acto de fraude o de abuso de confianza, establecidos por sentencia judicial;
- 2º Incapacidad para desempeñar los deberes y obligaciones a que se sometieron, excepto cuando es sobreviniente a la iniciación del servicio;
- 3º Negociación por cuenta propia o ajena, sin expreso permiso del principal, cuando afecta los intereses de éste.

Art. 2º — Los principales están obligados, desde la promulgación de esta ley, a llevar un libro especial que tendrá todas sus hojas numeradas y rubricadas por el Departamento Nacional del Trabajo en la Capital Federal y territorios nacionales, y por las oficinas correspondientes en las provincias, en el que conste el nombre de los empleados, factores, dependientes, viajantes, encargados u obreros; fecha de su ingreso, sueldos, salarios, comisiones, gratificaciones u otras remuneraciones que perciban, así como todo contrato de empleo y demás condiciones y datos a que se refieren los artículos del Código de Comercio que modifica la presente ley.

Art. 3º — Las disposiciones de esta ley se declaran de orden público y se aplicarán a los casos de despido ocurridos desde el 1º de Agosto de 1932.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, Agosto 2 de 1932.

Luis Grisolia. — Carlos D. Courel. — Bernardo Sierra. — Enrique Dickmann. — Silvio L. Ruggieri. — Carlos G. Colombres. — Agustín J. Carús. — Abraham de la Vega. — Próspero Abalos

ANTECEDENTES

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Substitúyase el artículo 157 del Código de Comercio por el siguiente: «El factor, dependiente, empleado viajante u obrero que trabaja a sueldo, jornal, comisión u otro medio de remuneración cualquiera, tendrá derecho — excepto en los casos de notoria mala conducta que deberá ser probada por el principal y fundada en sentencia de juez competente — a una compensación equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicios prestados, en caso de pérdida forzosa de su empleo u ocupación.

Los que tuvieran menos de un año de antigüedad tendrán como compensación un solo mes de sueldo.

Las comisiones, gratificaciones u otros medios de remuneración que reciben los factores, empleados dependientes, viajantes y obreros, deberán considerarse como formando parte del sueldo o salario a los fines de la compensación.

La suspensión de tareas, por más de tres meses, ordenada por el principal, se considerará como despido.

La rebaja injustificada de los sueldos, salarios, comisiones, gratificaciones u otros medios de remuneración, no aceptada por los afectados, colocará a éstos en situación de despedidos y con derecho a percibir la compensación que establece este artículo.

Art. 2º — Inclúyase en el Código de Comercio, los siguientes artículos nuevos.

Art. 157. — a). En caso de fallecimiento, los derechohabientes de los factores, empleados, viajantes, dependientes y obreros, que estuvieran al servicio de un principal, gozarán de una compensación equivalente a la establecida por el artículo anterior.

Art. 157. — b). Estas compensaciones serán garantizadas por el principal mediante pólizas de seguro contra el riesgo de desocupación forzosa y fallecimiento, de un monto equivalente a un sueldo mensual por cada año de servicios prestados. El pago de las primas correspondientes estará a cargo del principal.

El seguro será obligatorio. El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación a que deberá sujetarse. Los beneficiarios de esta ley comprenderán a las personas que ganen sueldos menores de \$ 500 moneda nacional mensuales; y a los que ganen más, sólo hasta ese monto.

Art. 157. — c). Decláranse privilegiados los créditos correspondientes a los sueldos, salarios, comisiones y toda otra remuneración de trabajo de los factores, empleados, viajantes, dependientes y obreros así como las compensaciones a que se refieren los artículos 157 y 157 a). Los beneficios de esta ley son irrenunciables e inembargables.

Art. 3º — Los factores, empleados, dependientes, viajantes y obreros comprendidos en las disposiciones del Código de Comercio, gozarán, desde la sanción de la presente, de los beneficios de la ley 9.688, de accidentes del trabajo.

Art. 4º — Los principales están obligados, desde la promulgación de la presente ley, a llevar un libro especial, que tendrá todas sus hojas numeradas y rubricadas por el Departamento Nacional del Trabajo, en la Capital Federal y territorios nacionales, y por las oficinas correspondientes en las provincias, en el que conste el nombre de los factores, dependientes, empleados, viajantes y obreros; fecha de su ingreso, sueldos, salarios, comisiones u otra remuneración que perciban así como las demás condiciones y datos a que se refiere esta ley.

Art. 5º — Comuníquese, etc.

Adolfo Dickmann.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícanse los artículos 155, 156 y 157 del Código de Comercio, en la siguiente forma:

«Artículo 155. — Los accidentes imprevistos o inculpables, así como las enfermedades profesionales que impidieren el ejercicio de las funciones de los factores, dependientes, empleados u obreros, a sueldo o jornal, no interrumpen la adquisición del salario que les corresponda, siempre que la inhabilitación no exceda de tres meses continuos.

«Art. 156. — Si en el servicio que presta al principal aconteciere al factor, dependiente, empleado u obrero a sueldo o jornal, algún daño o pérdida extraordinaria, será a cargo del principal la indemnización del referido daño o pérdida, a juicio de arbitradores.

«Art. 157. — No estando determinado el plazo del empeño que contrajeran los factores, dependientes, empleados u obreros, a sueldo o jornal, con sus principales, puede cualquiera de los contrayentes darlo por acabado, avisando a la otra parte de su resolución, con un mes de anticipación.

«El factor, dependiente, empleado u obrero, a sueldo o jornal, tendrá derecho, excepto en los casos en que el principal pruebe la notoria mala conducta de aquél, al salario correspondiente a ese mes; pero el principal no estará obligado a conservarlo en su establecimiento ni en el ejercicio de sus funciones.

«Para los factores, dependientes, empleados u obreros, a sueldo o jornal, con más de un año de antigüedad, la indemnización en caso de despido, será de un mes de sueldo por cada año de servicios, computándose como año, pasado el primero, toda fracción mayor de seis meses.

«Cuando la remuneración consista en una comisión sobre las ventas, o sueldo y comisión, el mes de sueldo se fijará dividiendo por doce el importe total de lo percibido lo a percibir en tal concepto por el factor, dependiente, empleado u obrero en el año inmediato anterior al del despido, si tenía más de un año, y en caso contrario, sacando el promedio de los meses de trabajo.

«Son privilegiados los créditos que correspondan como indemnización según este artículo.»

Art. 2º — Comuníquese, etc.

M. González Maseda. — C. Manacorda.

— R. Giusti. — Bernardo Sierra. —

Federico Pinedo. — Alfredo L. Spinetto. — Fernando de Andreis

CODIGO DE COMERCIO

Texto de los artículos reformados

Artículo 154. — Los factores y dependientes de comercio son responsables a sus principales de cualquier daño que causen a sus intereses por malversación, negligencia o falta de exacta

ejecución de sus órdenes e instrucciones; quedando sujetos, en el caso de malversación, a la respectiva acción criminal.

Art. 155. — Los accidentes imprevistos o inculpables que impidieren el ejercicio de las funciones de los factores o dependientes, no interrumpen la adquisición del salario que les corresponde, siempre que la inhabilitación no exceda de tres meses continuos.

Art. 156. — Si en el servicio que presta al principal aconteciere al factor o dependiente algún daño o pérdida extraordinaria, será de cargo del principal la indemnización del referido daño o pérdida, a juicio de arbitradores.

Art. 157. — No estando determinado el plazo del empeño que contrajeran los factores y dependientes con sus principales, puede cualquiera de los contrayentes darlo por acabado avisando a la otra parte de su resolución con un mes de anticipación.

El factor o dependiente despedido, tendrá derecho, excepto en los casos de notoria mala conducta, al salario correspondiente a ese mes: pero el principal no estará obligado a conservarlo en su establecimiento ni en el ejercicio de sus funciones.

Art. 158. — Existiendo plazo estipulado, no pueden arbitrariamente las partes separarse de su cumplimiento. El que lo hiciere estará obligado a indemnizar al otro, a juicio de arbitradores, de los perjuicios que por ello le sobrevenga.

Art. 159. — Se considera arbitraria la inobservancia del contrato entre el principal y su factor o dependiente siempre que no se funde en injuria que haya hecho el uno a la seguridad, al honor o a los intereses del otro o de su familia.

Esta calificación se hará prudencialmente por el tribunal o juez competente, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que median entre los superiores e inferiores.

Art. 160. — Con respecto a los principales, son causas especiales para que puedan despedir a sus factores o dependientes, aunque exista empeño o ajuste por tiempo determinado:

- 1º Incapacidad para desempeñar los deberes y obligaciones a que se sometieron;
- 2º Todo acto de fraude o abuso de confianza;
- 3º Negociación por cuenta propia o ajena, sin expreso permiso del principal.

Sr. Presidente (Cafferata). — En consideración.

Sr. Courel. — Pido la palabra.

La Comisión de Legislación General me ha encargado informar el despacho que está a consideración de la Honorable Cámara y expresar las razones que la han determinado para firmarlo por unanimidad de los miembros que la componen y que representan la totalidad de los sectores en que está dividida la opinión de la Honorable Cámara.

Desde luego, esa feliz circunstancia no ha sido fruto de la complacencia ni de la tolerancia en las ideas expuestas en el debate y en el largo estudio de la comisión; ha sido la justa penetración de los miembros de la misma ante un problema de actualidad siempre creciente, ya resuelto en la mayoría de los países europeos y americanos y que, por circunstancias ajenas al ambiente y a las necesidades, ha quedado sin resolverse, causando ese retardo graves daños morales y materiales a una gran masa de la población argentina que colabora directa e indirectamente en el progreso comercial de este país industrial.

La base principal del despacho radica en cinco proyectos presentados a esta Cámara por los señores diputados Míguez y José Heriberto Martínez, González Iramain y otros, Guillot, Adolfo Dickmann y González Maseda — estos dos últimos en las sesiones correspondientes al presente año — que decidieron a la comisión a estudiar y producir el despacho que figura en la orden del día.

Concuerdan todos esos proyectos en la idea fundamental de indemnizar el despido de los empleados, factores y dependientes de comercio, en forma tal que ante la brusca y desagradable situación de perder el trabajo cuando a él habían contribuido con toda su actividad y en la época de sus mejores energías, se les permita vencer las dificultades hasta tanto encuentren una nueva ubicación que los restituya a la situación normal de su vida de trabajo.

En el año 1928, las tres primeras iniciativas tuvieron despacho de la Comisión de Legislación, el que llegó a ser tratado en la sesión del 26 de Septiembre de ese año y figura en el Diario de Sesiones correspondiente, página 2.294, habiendo informado ese despacho el entonces diputado de Tomaso y siendo firmado también en aquella oportunidad por unanimidad de los miembros de la Comisión de Legislación.

El ex diputado Ferrarotti, después de un erudito discurso del doctor de Tomaso fundando el despacho, impugnó el mismo aduciendo poderosas razones, entre ellas la falta de una disposición sobre preaviso que motivaría la culpa patronal, para demandar la indemnización correspondiente, e hizo también diversos argumentos referentes a la calificación de los auxiliares de comercio, la situación del comerciante que vende su negocio, del comerciante o empleado que muere en sus funciones, como asimismo a los casos de mala conducta que impone el despido inmediato, y sin indemnización, del empleado.

Aquella discusión, interesante por todos conceptos, demostró, a juicio de la comisión, la falta de un estudio completo del asunto que la motivara, ya que la garantía que se quería establecer para los auxiliares de comercio no resultaba teórica ni prácticamente asegurada, por lo que la Cámara, con muy buen criterio, resolvió su reingreso a la comisión.

El proyecto del señor diputado Adolfo Dickmann, como él mismo lo dice en sus fundamentos, recoge aquellas iniciativas, como así también las objeciones que se formularon en la sesión a que me refiero, y haciéndose cargo de ellas, formula el proyecto que ha despachado la comisión. La comisión ha despachado el proyecto, ampliándolo, porque cree que es ésta la oportunidad de hacer una modificación orgánica al proyectarse reformas a los artículos 155, 156 y 157 del Código de Comercio, sin que ello implique una

modificación parcial del código, siempre de aplicación difícil y complicada.

A esta altura de mi exposición no debo dejar de expresar una circunstancia feliz que ha influido poderosamente en el estudio, ampliación y redacción de este despacho. Me refiero al ingreso a la comisión del señor diputado Ruggieri, quien con la capacidad e inteligencia que todos le reconocemos ha colaborado en forma decisiva en la redacción de este despacho, que asegura en una forma definitiva una conquista social importante, a juicio de la comisión, destinada a garantizar un beneficio por el que han luchado con empeño los empleados de comercio de todo el mundo.

Bien es cierto, señor presidente y señores diputados, que en la mayoría de las legislaciones este asunto está incorporado al código de trabajo, donde están regulados los derechos y obligaciones de los contratos de empleos individuales y colectivos que tanta estabilidad y tranquilidad han otorgado a las relaciones entre patrones y obreros; pero ello no obsta para que en países como el nuestro, que sin tener esa legislación especial tiene incorporada a su legislación positiva disposiciones que regulan esas actividades, incorpore modificaciones de detalle a principios ya reconocidos, que no harán nada más que extender o limitar las consecuencias que el mismo hecho produce en la diversidad de situaciones jurídicas.

No puede olvidarse tampoco que los artículos a que me estoy refiriendo fueron sancionados por el Honorable Congreso en 1889, cuando el comercio de este país se encontraba en su iniciación, limitadas las operaciones comerciales a las generales de la época, sin el mecanismo complejo que la continua evolución ha ido imponiendo con rapidez asombrosa. El empleado de comercio de 1889 no es el mismo que podría desempeñarse hoy: sus condiciones, su capacidad, sus energías, su actividad tendrían que ser distintas. Aquel comercio era sencillo, fácil y se realizaba sin tropiezos; puede decirse

que el patrón era el único dependiente, factor, empleado y obrero, como pueden atestiguarlo muchos hombres que aún viven y recuerdan aquellas épocas, en que a pesar de la existencia de una legislación sobre empleados de comercio, no tuvieron jamás necesidad de recurrir a ella.

Hoy la actividad comercial es distinta, como distinta es la característica impuesta a sus auxiliares. Hoy una casa de comercio grande, importante, cuenta con su cuerpo de contadores, tenedores de libros, gerentes, comisionistas, viajantes, empleados, distribuidores de mercaderías, cajeros, empaquetadores, cargadores, distribuidores de pequeños útiles y pequeñas mercancías dentro de la propia casa, serenos y obreros permanentes — escuche bien la Honorable Cámara — y obreros permanentes que son cosa común en la profusión de casas de comercio distribuidas en todo el territorio de la República.

La actividad comercial se ha desarrollado con prontitud por las necesidades crecientes de la población, y por tanto, del exiguo número de empleados auxiliares de comercio puede decirse, sin temor a equivocarse, que hoy pasa de 800 mil.

No he de hacer en este informe la historia del desarrollo del comercio en el país; pero sí afirmo que la legislación patronal y obrera comercial a este respecto es anticuada y que si bien es imposible modificarla parcialmente, de manera que la unidad establecida sufra una variación fundamental, no es menos cierto que dentro de la existente se pueden ampliar los derechos que ella misma consagra, sin que por ello nuestro Código de Comercio pierda sus características fundamentales. No importa otra cosa el despacho de la comisión, ni las iniciativas a que me estoy refiriendo, fruto de un anhelo y una aspiración ambiente. Y aunque parezca contradictorio a algunos señores diputados, piensa la comisión que es ésta la mejor oportunidad para tratar este asunto, precisamente en momentos en que el comercio y los comerciantes aducen situaciones difíciles; en épocas

de prosperidad las diferencias son mayores, y por consecuencia, la desigualdad en los efectos de la misma medida o disposición puede ser irritante e injusta. Pero cuando el patrón y el empleado soportan en su medida idénticas cargas y sufren por igual las consecuencias de hechos que no radican en su labor diaria, y no tienen intervención en las causas que dan origen a tal estado de cosas, la ley con espíritu de igualdad, sin otra razón superior que la humana justicia, tiene el deber de proteger esa situación igualitaria, ya que ella ha de regir en una forma permanente y estable, de sana previsión social, las futuras relaciones jurídicas entre el empleador y sus auxiliares.

Es, pues, también oportuno el despacho de la Comisión de Legislación General y lo demuestra la cantidad de notas llegadas al seno de la misma, que no tengo en este momento en mi poder, pero que se han ido publicando y distribuyendo con profusión entre los señores diputados, no sólo de organizaciones de empleados sino de organizaciones patronales. Las notas de las asociaciones patronales — fuera de la aspiración legítima de los empleados que han hecho llegar a la Comisión de Legislación y a la Cámara su anhelo de que ésta se aboque al estudio de este asunto —, contienen objeciones que sólo han podido referirse, sin negar la justicia de las modificaciones al proyecto o del proyecto mismo, pura y exclusivamente al término «obrero» y a la oportunidad de que esta Cámara trate el asunto.

Como los señores diputados van a ver en el informe que voy produciendo, esas objeciones desaparecen, si se estudian — en la forma que lo hace por mi intermedio la Comisión de Legislación — las razones que la han determinado para presentar el despacho que está en consideración.

Se ha dicho en otra oportunidad que la jurisprudencia ha interpretado en diversas formas la expresión «dependiente de comercio» a los efectos del pago de la indemnización fijada en el

artículo 157 del Código de Comercio. Ya en muchos casos se había establecido que sólo percibirían el mes de indemnización aquellos que trataban directamente con el público, hecho que ocasionaba la exclusión injustificada de los beneficios del citado artículo, de una gran parte del personal que, si no está en trato con el público, desempeña funciones igualmente importantes dentro del mecanismo comercial. Las operaciones no podrían ser realizadas si con anterioridad los empleados de comercio no hubiesen trabajado para descargarse el artículo, para exhibirlo, para ponerlo en vidrieras, salones o en forma de muestras, para anotarlo en los libros y en el inventario respectivo, para comprometer la venta del mismo en la casa o fuera de ella, envuelto en paquetes, si es manuable, o facturándolo a destino, para que el repartidor termine la operación, ya entregándolo o haciendo firmar la boleta de entrega o venta. El contralor ha de ejercerlo el personal técnico, ya perciban esos empleados de comercio sueldo mensual o jornal diario, sueldo fijo o sueldo y comisión, o cualquier otra forma de remuneración. Estos auxiliares o dependientes del principal, llámense factores, dependientes, viajantes, encargados u obreros y todos los que intervienen en la operación y realización de un negocio por cuenta del principal, tengan o no tengan relación con el público y — ruego a los señores diputados se fijen bien en este concepto — que en forma permanente y efectiva contribuyan a la realización o terminación de una operación de comercio, son, a juicio de la comisión, empleados de comercio y por consiguiente a todos ellos les corresponden los beneficios de las modificaciones que se han de introducir.

La comisión cree que el concepto de empleado de comercio debe ser ampliado, como lo acabo de expresar, ya que todos forman parte del rodaje comercial que tiene por finalidad realizar operaciones de comercio del empleador, sea su intervención directa o indirecta con el público, porque el contrato de

empleo radica, no sólo en la confianza que debe prestarse al individuo que desempeña el servicio y colabora con el patrón, sino también en la necesidad de la actividad demandada en la ejecución del trabajo, pudiéndose definir, a juicio de la comisión, el contrato de empleo «como una convención por la cual una de las partes (empleado de comercio) promete a la otra (empleador) su trabajo por un tiempo determinado o indeterminado, mediante el pago de un salario, de un sueldo, de una comisión u otro medio cualquiera de remuneración».

Definido como queda el contrato de empleo y quiénes son empleados de comercio, agregaré que él debe tener por objeto ejecutar la tarea encomendada según las órdenes del empleador y en el modo y condiciones en que comúnmente esa tarea se realiza. De ahí la obligación del empleador de fijar en los locales de negocio el reglamento en que estén determinadas las obligaciones de los empleados, como queda establecido en el artículo 154 del despacho, a los efectos del fiel cumplimiento de las condiciones en que debe realizarse el trabajo.

La idea central que informa el despacho sobre este punto es la contenida en todos los proyectos presentados cuando se ha querido proteger y defender no sólo a los factores que están calificados y definidos por el código, no sólo a los dependientes que tratan directamente con el público, sino a todos los empleados de una casa comercial, ya sea que desempeñen funciones técnicas como los empleados de escritorio, cajeros, viajantes, vendedores, sino también a todos los empleados y obreros, ya tengan sueldo fijo o comisión, gratificación, jornal diario u otro medio de remuneración, por ser personas que ayudan en su esfera al principal o empleador en la gestión y desarrollo de las actividades comerciales. Y aquí cabe consignar que no se trata de un concepto jurídico nuevo al incorporar y calificar en esta forma a los empleados de comercio, pudiéndose citar a este respecto el Código Federal

suizo de las obligaciones que en diversos artículos enumera las distintas personas, como lo hace la comisión, y las califica dentro del término general de empleados de comercio. La ley italiana número 1.825 sancionada en 13 de Noviembre de 1924; que es, a juicio de la comisión, la ley más adelantada, comprende también, en la forma a que acabo de referirme, el concepto de los empleados de comercio.

Y por último, el código francés en su artículo 23, últimamente reformado por ley promulgada el 19 de Julio de 1928, comprende también en la forma como lo entiende y lo ha despachado la comisión, a esta expresión genérica «empleados de comercio».

Los códigos de Perú y Chile, sancionados últimamente, en los años 1929 y 1930, han seguido, más o menos, las modificaciones introducidas en el código francés y, por lo tanto, también han incorporado a los artículos pertinentes, y que podrían corresponder a este despacho, a los empleados de comercio en el término genérico, como lo entiende la comisión.

De modo, pues, que no puede asombrar ni asustar que se emplee como un agregado la palabra «obrero», teniendo en cuenta las explicaciones de cómo entiende la comisión el alcance de este término dentro del despacho.

Determinan ese alcance, en forma precisa, las manifestaciones que estoy formulando en nombre de la comisión. No se trata del obrero del momento, del obrero de la industria; se trata del obrero — llámese sereno, empaquetador, etcétera — que en forma permanente está contribuyendo con su esfuerzo dentro del mecanismo de las operaciones comerciales al mejor desarrollo de las mismas, y que por el hecho de prestar una actividad material está excluido injustamente de la disposición del artículo 157, que trata de amparar al personal de comercio, en caso de despido.

Es concepto ya vulgar equiparar la enfermedad contraída en el desempeño del trabajo y como consecuencia necesaria del mismo, al accidente, y eso y no otra cosa significa la modifica-

ción al artículo 155. La comisión cree que el accidente imprevisto e inculpable y la enfermedad profesional definida por la ley 9.688 importan la obligación del empleador de pagar los salarios por razones de humana consideración, por razones de orden social, otorgando tres y seis meses de sueldo según sea la antigüedad en el servicio hasta de diez años, o de mayor tiempo, teniendo en cuenta el sueldo, comisión, jornal u otro medio de remuneración a los efectos de su liquidación al término de los últimos seis meses, ya que la cantidad puede variar según sea la actividad desarrollada por el empleado de comercio.

La jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto en una forma casi uniforme considerando la enfermedad contraída como una consecuencia necesaria e inmediata del trabajo que realiza en la casa de comercio. Tengo aquí un fallo de la Cámara Comercial, tomo VI, página 78, en el que podemos resumir la doctrina aplicada hasta la fecha por nuestros tribunales. «El dependiente — dice que por enfermedad no concurrió durante 2 meses a su empleo — tiene derecho a los salarios correspondientes a ese tiempo y un mes más de sueldo, si no se ha hecho notar por su mala conducta.»

Lógico resulta prever, entonces, que tratándose de accidentes y enfermedades inculpables, por analogía del principio de la culpa establecida en el artículo respectivo de la ley 9.688, el empleador deba conservar el puesto al empleado y ser responsable de los daños o pérdidas que sufra durante el servicio que presta al principal.

La práctica, por lo que se refiere a los empleados llamados a las filas para el cumplimiento del servicio militar, ha movido a los miembros de la comisión a establecer un apartado en el sentido de la conservación del empleo cuando los empleados fueran llamados a prestarlo, siguiendo el ejemplo de la ley orgánica militar en lo que se refiere a los empleados del Estado.

En el artículo 156, que se incorpora como nuevo, se regulariza legalmente una situación de hecho ya perfecta-

mente establecida por la costumbre en el sentido de las licencias anuales según la antigüedad en el servicio, dejando la elección de la época al criterio del empleador. Este concepto tan humano, tan lógico, ha hecho pensar a algún espíritu suspicaz, con ligereza alarmante, que se trata en el despacho de la comisión de otorgar vacaciones con sueldo a los empleados de comercio; y hasta se ha agregado que lo único que falta sería indicarles el sitio a que debían dirigirse en sus vacaciones en busca de expansiones. Desde luego, es tan ridículo el argumento — de tal lo califico — que se olvida al decir eso que los empleados de comercio están sujetos a los usos y prácticas que impone la misma calificación del derecho comercial, y dentro de esos usos y de esas prácticas está ya establecido en una forma definitiva que el empleado necesita períodos de descanso, que el principal debe contribuir a facilitárselos, precisamente para reparar las energías que ese empleado necesita desarrollar en el desempeño de su actividad constante, diaria y muchas veces mal remunerada. De modo que esta licencia, de acuerdo a la antigüedad en el servicio, no tiene por objeto nada más que legalizar una situación de hecho perfectamente admitido en los comercios grandes y en los comercios chicos. El artículo 7° de la ley número 1.825 del 13 de Noviembre de 1924, de Italia, legisla concretamente esta materia.

En cuanto al artículo 157, que ya fuera debatido en otra oportunidad, que dice:

«No estando determinado el plazo del empeño que contrajeran los factores y dependientes con sus principales, puede cualquiera de los contrayentes darlo por acabado avisando a la otra parte de su resolución con un mes de anticipación.

«El factor o dependiente despedido, tendrá derecho, excepto en los casos de notoria mala conducta, al salario correspondiente a ese mes; pero el principal no estará obligado a conser-

varlo en su establecimiento ni en el ejercicio de sus funciones.»

La comisión ha producido reformas que considera fundamentales, por lo que es conveniente enunciarlas por separado a los efectos de su explicación. Ellas se refieren al preaviso, a la notificación y términos del preaviso, a la indemnización, al sueldo u otro medio de remuneración cualquiera, a los beneficios y a la responsabilidad.

De la lectura que acabo de hacer del artículo 157 se desprende que sanciona la indemnización por falta de preaviso y la indemnización por despido, porque si el Código de Comercio dice que no haciéndose uso del mes de preaviso, debe abonarse el sueldo de un mes, en su segunda parte expresa que el principal, abonando ese sueldo, «no estará obligado a conservarlo en su establecimiento», etcétera. Corresponde el pago de esa indemnización al patrón o empleador, entonces, que despide a su personal sin el preaviso y también cuando, avisando, despide al personal. El preaviso es una advertencia del empleador a su empleado de acuerdo a la doctrina jurídica universalmente aceptada hoy de que la convención establecida por las partes en forma unilateral tendrá fecha cierta de rescisión fija; es decir, con más claridad, que la doctrina del preaviso sanciona, con el término de su escala por la antigüedad de servicios, fecha cierta de terminación del contrato de empleo.

Esta interpretación clara está establecida en todas las legislaciones que sancionan indemnización por despido y por falta de preaviso.

El tratadista Jean Desprez, juriscónsulto de nota y que hoy puede decirse que después de su libro *Delai Congé*, de 1929, nada se ha escrito en forma más completa, superior y documentada, trata en su libro la cuestión en forma admirable. En ese libro estudia las legislaciones de todos los países, ratificando y reafirmando conceptos claros y precisos que el lector menos acostumbrado a la técnica jurídica puede sacar consecuencias, que abonan el despacho que

informo. La comisión ha tenido y ha estudiado a fondo ese libro de acuerdo al proyecto, sirviéndose de él para conocer todas las legislaciones que se mencionan y analizan.

Desde luego, ha servido de base para aquel estudio la última modificación al código francés del trabajo en su artículo 23. Pero donde, en realidad, está expresado con muchísima claridad el concepto en la forma en que lo ha despachado la comisión es en la ley 1.825 del reino de Italia, de Noviembre de 1924; en el código de Austria, por ley de 16 de Enero de 1910, en sus artículos 19, 20, 21 y 23, sobre el contrato de trabajo de empleados de comercio; en la ley belga del 7 de Agosto de 1922 relativa al contrato de empleo, en sus artículos 1º, 2º, 12 y 17. Bolivia, Chile y Perú han incorporado estos principios universales a su legislación positiva por leyes que son conocidas y que no tengo a mano en este momento.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º, doctor Augusto Bunge.

El despacho, pues, se aparta de la vieja modalidad de la única indemnización por falta de preaviso, ya que si el propósito del mismo era reparar pecuniariamente al empleado dejado cesante otorgándole un mes de sueldo que le permitiera subvenir a sus necesidades y a las de su familia, convengamos señores diputados que ese propósito no era humano ni medianamente aceptable.

No sólo estamos retardados en la interpretación legal de la indemnización por falta de preaviso y de la indemnización por despido, sino que se hace imprescindible una modificación como la que propone el despacho, ya que la modalidad comercial argentina es distinta, nueva y, por lo tanto, igual a la que en Europa se practica.

Es necesario comprender que quien ha dedicado la mayor parte de su vida a ser empleado comercial ha hecho de ello una actividad a la que se dedica como único medio de su existencia. Es una carrera como la administrativa, en

que se pasan largos años con sueldos, salarios y comisiones reducidos y en la que cuesta trabajo ascender.

Las características no son iguales para todos los que ejecutan esa labor y por ello no todos pueden ser equiparados en sus beneficios, aunque sí en sus efectos. La antigüedad en el servicio tiene algún mérito o, por lo menos, una razón de existencia y es natural, por consiguiente, que esa antigüedad tenga en la legislación una garantía que la estimule y la contemple. Por eso en las legislaciones se establece no sólo la escala del tiempo del preaviso. En muchas de ellas, como la francesa citada, se atiende a los usos y prácticas del lugar. El despacho fija — tomándolo del artículo 10 de la ley italiana —, según la antigüedad en el empleo.

La indemnización por falta de preaviso en aquella oportunidad a que me he referido no fué objetada, tanto que el doctor Ferrarotti, según consta en la página 2.301 del Diario de Sesiones citado, se expresó en estos términos: «Esa indemnización previa de despido es una especie de derecho adquirido por los empleados.» Y es claro, pues se trata de un principio incorporado a todas las legislaciones y del que sólo debo decir, para concluir, que no puede ser discutido, pues siendo de efectos iguales para el empleador y empleado de comercio tomando la acepción general, introduce el justo principio de equidad y por tanto la extensión de la culpa para cualquiera de los contratantes, trátase o no de contratos a tiempo determinado.

Colocados en la indemnización por falta de preaviso, empleador y empleado, en un pie de igualdad jurídica, la rescisión del contrato debe resolverse por las reglas generales que el mismo código tiene establecidas, es decir, la rescisión unilateral sin culpa pronunciada, ocasiona la resolución del contrato más los daños consiguientes. La indemnización por despido debe ser más amplia que la consagrada por el artículo 157 del código actual; debe ser humana y preventiva de la situación en

que se coloca al empleado de comercio despedido, a fin de que pueda afrontar las necesidades que esa situación imprevista le crea y que le permita buscar con tranquilidad otra ubicación conforme a sus actividades, más o menos en la misma situación en que se encontraba al ser despedido. Esta responsabilidad a cargo del empleador, haya o no preaviso, sancionada por la doctrina del artículo actual, se amplía por el despacho extendiendo sus beneficios en relación a los años de servicios y fijándole un límite anterior a la sanción de la ley, por tratarse de una ley de orden público, como así también restringiendo la indemnización a la mitad de un mes de sueldo, jornal o comisión que resulte de un promedio que tendría por base los últimos cinco años, o todos los años de servicios cuando no se alcance ese tiempo, ya que la comisión se hace cargo del argumento que podría formularse en el sentido de que ella ocasionaría serios trastornos financieros a los patrones que se encuentren en una situación difícil y que no pensaron que pudieran extenderse los beneficios acordados por la ley comercial a los empleados actuales. Lo establecido a este respecto por la comisión casi no tiene diferencia con lo que determina la legislación de los países a que me he referido. En el despacho se adopta lo que establece la ley italiana que, repito una vez más, es a juicio de la comisión la más adelantada, justa y humana en esta materia. De ella, puede decirse, están tomadas las disposiciones referentes a la suspensión de tareas por tres meses en el período de un año que se considera como despido, *ya que ése es el término mínimo que debe tener el empleado de comercio para gozar de los beneficios que este despacho acuerda.* Asimismo se encuentran resueltas en este artículo las objeciones que se formularon en la oportunidad citada a la venta o cesación de negocio, al caso del comerciante o del empleado que muere, al caso de falencia y al privilegio que debe asignársele a la indemnización, de acuerdo al artículo 4º de la ley 11.278. Aceptado el principio de

que el despido, fuera del caso de culpa, constituye la rescisión del contrato de empleo, las consecuencias de daños e indemnización deben ser a cargo del que los produjo, con la obligación de repararlos conforme a lo que establece la ley.

Siguiendo el orden del despacho, como ve la Honorable Cámara, me he estado refiriendo a la indemnización por preaviso y por despido cuando la brusca ruptura se refiere al principal, y detallando los casos.

El principio de la responsabilidad por daños se extiende según los motivos que ocasionan la cesación brusca. Pudiera decirse en propiedad que éste es el modo positivo de terminación brusca del contrato de empleo, ya que a ese modo positivo debe aplicársele el principio de la culpa que determina consecuencias jurídicas distintas en cuanto a los efectos y responsabilidades. Así, puede concluirse que el preaviso y la indemnización por despido no son obligaciones a cargo del empleador cuando el empleado de comercio invoca motivo ilegítimo o ha cometido falta grave que impida la continuación del contrato de empleo.

Si bien, como llevo dicho, la modalidad de este contrato radica en la confianza y necesaria colaboración entre las partes a fin de obtener el mejor éxito en el resultado de las operaciones de comercio que realicen, no es menos cierto que son necesarias, además, condiciones de habilidad legal del que promete el servicio y del que ha de pagarle con un sueldo, comisión, habilitación, jornal u otra forma de remuneración.

Desde luego, el empleado de comercio debe ser un fiel ejecutor de las órdenes e instrucciones que reciba, como que debe poner en su servicio la mayor diligencia y actividad, de modo tal que la colaboración exigida esté en un todo de acuerdo con el propósito y fin de la actividad que realiza. Para ello el empleado ha de poseer la aptitud o grado de aptitud en el desempeño de los deberes y obligaciones a que se sometió, ya que su promesa estuvo

relacionada a un fin determinado y preciso en una clase especial de negociaciones, salvo que la ineptitud sea sobreviniente a la iniciación de su servicio con ese principal; de otro modo no existiría capacidad para prometer. La mala conducta que perjudica el crédito del establecimiento y, por consiguiente, la marcha de los negocios, el fraude o abuso de confianza, la negociación por cuenta propia o ajena que perjudica los intereses del principal, ocasiona la brusca ruptura negativa del contrato. Esto es lo que dispone el artículo 160 del despacho, ampliando los casos que en forma genérica están determinados por el artículo 154.

Cree la comisión necesario decir, para evitar interpretaciones judiciales, que a veces son tan variables, que en estos casos de resolución motivados por mala conducta, la prueba incumbe al principal, ya que es la excepción que se invocará para no cumplir con una obligación ya establecida. Su antecedente es también el artículo 23 del código francés y el artículo 8º de la ley italiana número 1.825 a que me he referido con anterioridad, como así también los códigos de Perú y Chile.

En cuanto al artículo 159, la única modificación introducida se refiere al cambio de las palabras «factor o dependiente» por «empleado de comercio», ya que, como lo dejo dicho, esa palabra en forma general comprende a los dependientes, viajantes, factores y obreros, no cambiándose el concepto del artículo que se tuvo en cuenta al ser sancionado.

El artículo 158 es nuevo y su incorporación al texto del despacho es indispensable, si se quiere que sea efectiva la extensión de los beneficios acordados a los empleados de comercio, que se hace con el artículo 157.

El artículo 158 se refiere a los contratos de empleo a plazo determinado ya que ellos, formando una categoría especial pudieran restringir o alterar la regla sobre el preaviso, y también a la incorporación de cláusulas que importaran una exclusión de las obligaciones que corresponden al principal.

Y se explica que se establezca en forma especial esta nulidad a toda convención que reduzca obligaciones, desde el momento que el legislador las incorpora como de orden público por el inciso 3º del artículo 160, y que el precepto viene a hacerlas irrenunciables y de cumplimiento ineludible.

Dentro de la teoría de la responsabilidad por despido, los contratos a tiempo determinado no son considerados de plazo vencido sin preaviso, ya que si así se estableciera, las convenciones de las partes restringirían las obligaciones establecidas, burlando de ese modo el espíritu y la esencia de la reforma incorporada. Por eso se establece que a no mediar el preaviso se entiende tácitamente prolongado el contrato a término fijo, por un igual período de tiempo, salvo el caso de nuevo contrato en el que la voluntad de las partes ha coincidido en prolongar el mismo, lo que también implica la tácita reconducción ya que no ha habido interrupción en el servicio prometido.

Se establece también por el inciso 2º del artículo 160 la obligación de llevar un libro especial que tendrá todas sus hojas numeradas y rubricadas por el Departamento Nacional del Trabajo en la Capital Federal y territorios nacionales y por las oficinas correspondientes en las provincias, ya que se trata de leyes de forma, en las que conste el nombre de los empleados, factores, dependientes, viajantes, encargados u obreros, fecha de su ingreso, sueldo, salario, comisiones, gratificaciones u otras remuneraciones que perciban, así como todo contrato de empleo y demás condiciones y datos a que se refieren los artículos del Código de Comercio que modifica la presente ley.

Creo dejar fundado, señores diputados, el despacho de la Comisión de Legislación General que amplía las prescripciones protectoras y defensivas de los empleados de comercio en la medida en que la legislación actual debe contemplar este problema, sin so-

lución hoy dentro de nuestra legislación positiva.

Las modificaciones introducidas son razonables, prudentes y equitativas, ya que se proponen defender a la enorme población comercial, no sólo a los factores que, como he dicho, están calificados y definidos en el Código de Comercio — que son los que en realidad dirigen la casa comercial —, no sólo a los dependientes que tratan con el público o a los que desempeñan funciones técnicas, como a los empleados de escritorio, cajeros y vendedores, no sólo a los viajantes que recorren el país por cuenta del principal, sino también a los obreros, como el sereno, el empaquetador, el cargador, el repartidor y los acomodadores de artículos, y a todas las personas que ayudan o colaboran en la gestión y desarrollo de las actividades de una casa de comercio, porque en el concepto de la doctrina jurídica corriente, todos contribuyen a auxiliar al principal en su gestión.

No puede objetarse que algunas de las modificaciones introducidas entrañan un recargo apreciable en los gastos del principal, ya que ellas no modifican ni alteran las convenciones de empleo existente hasta la fecha, sino que las reglamentan en sus efectos, extendiendo los plazos de advertencia y compensando el despido sin causa, imprevisiones de la ley vieja que tienen que ser salvadas, para amoldar y adaptar las disposiciones de la ley referentes a usos y prácticas comerciales, a las modalidades ambientes del comercio, que está evolucionando de acuerdo con las nuevas necesidades sociales y económicas.

Los empleadores, por otra parte, están más garantizados por la propia disposición del artículo 157 del Código de Comercio, ya que en el futuro no podrá interpretarse de distinta forma que la enunciada en este informe y que surge de su texto claro y detallado. Ese resguardo y garantía están en las causales del despido, que en forma genérica se mencionan en el despacho y que ponen a cubierto de

todo trastorno y de cualquier inconveniente de orden comercial provocado por el mal desempeño con respecto a las órdenes, instrucciones, moral, negligencia, falta, abuso de confianza o incapacidad de los empleados de comercio.

No es, pues, propósito de este despacho favorecer al mal empleado de comercio, ni alterar las relaciones jurídicas, bajo mal entendidos intereses del contrato de empleo. Hay un interés superior, equitativo, jurídico, social: regular las relaciones de los empleados con sus empleadores asegurando a unos y otros los resguardos necesarios, con previsiones pertinentes para el mejor cumplimiento de las obligaciones contraídas.

El capricho, la causa fútil, la mala voluntad, la falta de razón, en fin, de los patrones para despedir a sus empleados con la miserable compensación de un mes de sueldo, que transforma a hombres de trabajo en eternos solicitantes agriados por su suerte, buscando mejoras imposibles y reivindicaciones de estabilidad dudosa, no será la regla temida por quienes han dedicado sus mejores energías y la mayor parte de su vida a esta noble y progresista actividad humana.

Por otra parte, los empleados de comercio contribuirán con fidelidad, en forma activa y empeñosa, con todo interés, al mejor éxito comercial de la casa donde trabajan, porque sabrán bien que la indemnización por preaviso y la compensación por despido corresponden sólo al empleado declarado injustamente cesante, estando la prueba a cargo del que puede hacer uso de las razones determinadas por los artículos 154 y 160 del Código de Comercio.

Tampoco hay, pues, restricción a la regla general de los contratos y a la libertad de las partes. Lejos de ello, señor presidente, la libertad objetada es la que priva a una de las partes de romper sin causas el convenio de empleo. La libertad de contratar no puede confundirse con el exceso, con el abuso que significa que cualquiera de las partes dé por rescindido el conve-

nio sin cumplir las obligaciones a que está sujeta y sin pagar los daños que ocasione la ruptura brusca y unilateral del contrato.

Se ha tratado de garantizar a los contratantes, poniendo de parte de cada uno de ellos un resguardo que los garantice contra el incumplimiento de las obligaciones contraídas, en una forma real, equitativa y económica, que no pone en peligro al comercio con cargas enormes y onerosas. Si el contrato de empleo radica, se ha dicho, principalmente en la confianza entre empleador y empleado, ¿qué más lógico y justo que esa relación, que no es confidencial sino pública, se regule con cláusulas positivas que garanticen en forma eficaz ese vínculo que los agrupó en una misma aspiración de éxito comercial? ¿Acaso esa confianza altera las condiciones económicas y jurídicas establecidas en cuanto al desarrollo comercial, al precio de los productos, al standard de vida de los empleados, a los gastos de los establecimientos, y puede llevar a una liquidación forzosa del negocio?

Todos nos damos cuenta de la situación general y todos sabemos cómo los comerciantes, los industriales, los ganaderos, los agricultores, todos los hombres de negocios, en presencia de una crisis mundial sin precedentes en el mundo entero, han tomado ya sus medidas — o, por lo menos, es de creerlo — se han puesto a cubierto de las malas perspectivas, limitando sus gastos, asegurando una pequeña utilidad que les permita desenvolverse libremente y con éxito en los negocios que realicen.

El empleador, por otra parte, podría siempre elegir y perfeccionar su personal, desde el momento que tiene la libertad suficiente y necesaria para despedir al mal empleado que no cumple con sus obligaciones y dificulta en su puesto el engranaje del mecanismo comercial.

Lo que no se quiere, señor presidente y señores diputados, lo que no permite, es la transgresión al convenio de empleo por capricho, por mala voluntad o por causas o pretextos de todo punto de vista inaceptables.

La Comisión de Legislación ha estudiado este asunto, señor presidente, con toda detención, sin apuro, pues lo ha mantenido durante más de dos meses en estudio. Sin apuro — repito — ha formulado el despacho que acabo de informar, y por las razones que he expuesto solicita de la Honorable Cámara el voto favorable al mismo, confiando en que hará obra de justicia al reparar el gran retardo de nuestra legislación a este respecto.

Nada más. (*Aplausos*).

Sr. Dickmann (A.). — Pido la palabra.

Muy pocas serán las palabras que voy a pronunciar, porque me considero eximido de la obligación de dar mayores fundamentos del proyecto de que soy autor, después de que la Honorable Cámara ha escuchado la luminosa exposición del señor diputado miembro informante de la comisión. El señor diputado por Córdoba, con sobriedad, con elocuencia y con una documentación irrefutable, ha prestigiado el despacho de tal modo que será difícil que pueda ser impugnado con éxito. Pero hay dos circunstancias igualmente personales que me impulsan a pronunciar algunas palabras, porque no podría quedar tranquilo con mi propia conciencia, si no las dijera.

En primer lugar, un deber de honestidad intelectual me obliga a citar las iniciativas precedentes a la nuestra. Ya el señor miembro informante de la comisión así lo hizo, pero creo de mi deber repetirlo.

El señor diputado por la provincia de Buenos Aires doctor Edgardo Míguez, recogiendo nuestras prédicas, presentó en 1924 el primer proyecto formal en este sentido. Renovó su iniciativa en 1926 y 1928. La idea se agitaba, desde luego, en el seno de la masa que trabaja en la actividad comercial, como una gran aspiración y una indispensable conquista. Posteriormente, en nombre del grupo parlamentario socialista, nuestro ex colega de entonces, el doctor Héctor González Iramain presentó en 1926 un proyecto un poco más ampliado que el que presentara en 1924 el doctor Míguez.

Más tarde, en el año 1928, el ex diputado radical doctor Víctor J. Guillot formuló también un proyecto análogo, de reformas al artículo 157. A base de estos proyectos y del espíritu general que estimulaba la reforma al Código de Comercio en esta parte, la Comisión de Legislación General del año 1928 despachó un proyecto que fué tratado en la Honorable Cámara en las últimas sesiones de ese año e informado por el ex diputado doctor de Tomaso, actual ministro de agricultura de la Nación.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan F. Cafferata.

El señor diputado miembro informante de la comisión recordó la circunstancia en que el ex colega doctor Ferrarotti, con la autoridad jurídica que le daba, no sólo su capacidad intelectual notoria, sino también el ejercicio durante años de las funciones de juez en lo civil, formuló en este recinto observaciones durante el debate que impresionaron a los señores diputados, y sin expresarse sobre el despacho en discusión, la Cámara resolvió devolverlo a la Comisión de Legislación General. Desde entonces el asunto no volvió más al recinto.

Impresionado, a mi vez, por las observaciones formuladas por el doctor Ferrarotti, en las primeras sesiones del período de 1929, recogí esas observaciones y les dí forma en el proyecto que presenté en nombre de mi colega el doctor Repetto y en el mío propio, cuando los dos formábamos el grupo parlamentario socialista.

Este año, caducado mi proyecto anterior por resolución expresa de la Cámara, lo mejoré en su estructura con sugerencias que me han venido del seno mismo de los que se interesan con más razón en este asunto. Ahora mi iniciativa ha tenido el honor de ser despachada por la comisión en forma tan auspiciosa.

Séame permitido, señor presidente, tributar un homenaje de admiración y

de respeto al trabajo intelectual, completo, sobrio y serio de la Comisión de Legislación General, que, mejorando todas las iniciativas hasta ahora formuladas, trae a consideración de la Cámara un despacho que no sólo prestigia a la comisión, sino también al Parlamento al tratar una ley en forma tan orgánica y tan completa.

Otro deber de conciencia, señor presidente, me impone la necesidad de pronunciar estas palabras, y es la virulencia, la injusticia y la incomprensión en el ataque a este proyecto por los interesados en que no sea sancionado y que yo debo destacar y del que debo defenderme. ¿Cómo me va a extrañar a mí, diputado socialista, que este proyecto tenga adversarios y sea combatido?

¿Qué valdría esta ley si ella no fuera el producto de la lucha de los intereses sociales, que determina esta nueva modalidad en la legislación contemporánea? Son tan ineludibles las observaciones y las objeciones a esta ley como ineludibles son las causas que la determinan. De ninguna manera puedo criticar los factores que se oponen a su sanción, pero menos deben ser criticables los legítimos intereses que bregan por conseguir alguna seguridad en la lucha por la vida; este numeroso y sufrido gremio de los que trabajan en el comercio en general bien merece la preocupación del legislador.

De lo que me quejo, lo que me afecta como diputado y como socialista, es una frase lanzada sin responsabilidad y que ya no debe ser usada en esta época y contra este Parlamento: de que estamos por dar nuevamente una ley demagógica. Me siento profundamente herido por semejante calificación del proyecto que tuve el honor de presentar. Me particularizo con el ataque al proyecto, porque ese ataque se inició justamente con motivo de su presentación y arreció una vez que se conoció el despacho que está a nuestra consideración en este momento.

Séame permitido afirmar, señor presidente, que si hay diputados argentinos que no pueden ser calificados de

demagógicos, en ningún caso, son los diputados socialistas. En épocas recientes que no están todavía en el olvido de la opinión pública, quizá ese calificativo podría aplicarse con alguna razón a cierta legislación que ha salido del Parlamento con la oposición en cada caso del grupo parlamentario socialista, aun cuando para ello hayamos tenido que herir sentimientos populares muy legítimos, pero que, a nuestro juicio, eran incomprensivos del momento para el cual se daba esa legislación.

¿Quién no recuerda nuestra actitud cuando en este Parlamento comenzaron a tratarse las leyes de jubilaciones gremiales? Nosotros, desafiando el sentimiento popular exaltado por prédicas interesadas, nos opusimos en este recinto, contra la mayoría dispuesta a otorgar lo que no era posible a las demandas proyectadas. Y el tiempo, señor presidente, que es el mejor amigo de la verdad, nos va dando la razón. ¿Qué ha quedado de la ley 11.289, sino su triste recuerdo?

La ley de jubilaciones ferroviarias fué combatida en su estructura en este recinto por un diputado cuyo nombre no debo pronunciar porque me está demasiado vinculado y que mereció, de parte de algunos, críticas severas porque no se colocaba dentro de la corriente de «generosidad» que entonces imperaba. Hoy son los obreros ferroviarios, conscientes y organizados, que tienen la responsabilidad de su propio destino, los que se presentan ante la Honorable Cámara pidiendo la reforma de la ley y dan razón a las objeciones formuladas por las diputaciones socialistas.

Y si no fueran suficientes este recuerdo y esta reivindicación histórica, hay otro hecho tan patente como el que cito para darnos autoridad y para que nadie ose calificar una iniciativa socialista como demagógica y electorera.

¿Quiénes no recuerdan la discusión del salario mínimo? En su defensa obtuvimos este año uno de nuestros sonados triunfos. Defendimos el salario mínimo como principio que regula la

remuneración del trabajo de los hombres para mantenerse dignamente ellos y sus familias; pero de eso a prometer dar lo que no puede resistir ni la industria, ni el comercio, ni la economía del país, media una gran distancia. Cuando aquí se discutió hace algunos años el salario mínimo, cuya iniciativa se debe a nuestro inolvidable maestro doctor Justo, los diputados radicales hicieron entonces un verdadero remate: 120, 130, 150, 160. Yo doy más, exclamó uno: doy 200. Los diputados socialistas dijimos: ¡no! El Estado debe ser el mejor patrón y debe remunerar de la manera más generosa a sus servidores, pero no debe pervertir el criterio con promesas falaces y perjudiciales para los intereses generales de la República. Nos quedamos en el justo medio, en los 160 pesos, que es lo menos que puede ganar un servidor útil del Estado; como ser un cartero, un vigilante o un obrero adulto cualquiera.

Y, posteriormente, un diputado radical por Córdoba, propuso en forma simplista, que los trabajadores, cualquiera fuera su sexo u ocupación, cualquiera la región del país en que viviesen, ganarían como salario mínimo 200 pesos mensuales. ¡Ideal, admirable, pero distante desgraciadamente de la posibilidad!

Fuimos nosotros, otra vez, los que levantamos la voz para llamar a la reflexión a los señores diputados de la mayoría. Si invoco estos ejemplos, es porque me quiero sacar de encima este fácil, como irresponsable cargo que hoy se nos formula, de que el proyecto que está a consideración de la Cámara es demagógico, que hace recordar tiempos pretéritos, que mejor sería que no volvieran más en este aspecto.

¿Y por qué se califica de demagógico el proyecto inicial y ahora el despacho de la comisión? ¿Qué es lo que proponía este diputado a nombre de su sector, que ha recibido tantas críticas, tantas cartas adversas y tantos disgustos personales de los detractores de esta

idea, que han sido, desde luego, compensados con otros que aplaudían la iniciativa? ¿Qué de monstruoso propone el proyecto? Veámoslo.

El proyecto propone, en esencia, y para no entrar en detalles, tres cosas: primero, un mes de sueldo por cada año de servicios como indemnización por despido o pérdida forzosa del trabajo de los empleados de comercio, entendiéndose por tales los factores permanentes ocupados en esa actividad; segundo, igual indemnización a los derechohabientes de los empleados de comercio, que hubiesen fallecido dejando a sus familias en el desamparo; y tercero, comprender dentro de la ley 9.688 de accidentes a todos los que trababan en el comercio, que en forma tan injusta habían sido excluidos de sus beneficios. Esto es todo, esto es lo que ha levantado tanta tempestad; es lo que ha dado motivo a tantos editoriales en contra del proyecto. Toda esta oposición tiene tal vez indecisos todavía a muchos diputados que estoy seguro no están muy interiorizados del fondo del problema. Y este debate ha de iluminar no sólo sus cabezas, sino también sus conciencias y determinar su voto.

Con esto podría dar por concluida mi exposición si no tuviera que acentuar un punto de vista sobre el cual insisto, aun cuando no está contemplado en el despacho. Me explico su exclusión, pero debo hacer sobre él algunas consideraciones porque considero que sin ese complemento la ley no resultará todo lo beneficiosa que debe resultar. Me refiero al seguro obligatorio o voluntario como financiación y eje de esta ley. Es, por otra parte, lo único novedoso que he traído en mi proyecto.

Comprendo, señor presidente, las dificultades de tal seguro pero no son de ninguna manera insalvables. Lo mismo se afirmó cuando se sancionó la ley 9.688. Entonces aparecieron los mismos argumentos; se dijo que cómo va a poder indemnizar un pequeño constructor, cuyo capital no alcanza a pesos 10.000, por ejemplo, los infortu-

nios por accidentes del trabajo de sus obreros albañiles, ya que éste es el gremio más castigado en el riesgo profesional. Se dictó la ley, vino el seguro que debe ser perfectible, que lo será, sin duda, y no se produjeron los desequilibrios de la estructura social, con los que se ha amenazado al discutirse la ley de accidentes del trabajo.

Estoy seguro que esta ley puede sufrir la misma evolución. Los comerciantes han tomado para la seguridad de sus negocios toda clase de recaudos; aseguran las casas donde se establecen, contra incendio. La mercadería, desde el instante mismo en que la compra en la fábrica de origen hasta que llega a su mostrador, tiene el seguro marítimo, de avería, y de todo otro riesgo que pueda sufrir. Se han introducido seguros de una índole insospechada; se aseguran los automóviles y los camiones, no solamente contra los accidentes de los vehículos sino del daño causado a terceros. Hasta el robo de esos elementos tienen seguro. Se asegura los cristales de las casas de negocios; se asegura el cobro de las cuentas incobrables. Hay bancos y compañías que aseguran al comerciante el cobro de ventas que hace con cierto riesgo, como las que se efectúan a plazos, por ejemplo.

¿Cómo no sería posible, me pregunto yo, con un criterio simplista y por eso mismo más verídico, organizar por los comerciantes mismos un seguro mutual contra el despido forzoso, o pérdida de trabajo no imputable a la voluntad humana? ¿Y cómo no será posible también, el seguro en caso de fallecimiento mediante pólizas colectivas o individuales?

Resuelto así el problema mediante un seguro, desaparece la única objeción impresionante a este proyecto. Si los comerciantes en la defensa de sus intereses tan complejos y tan serios que los obliga a contemplar problemas mucho más vastos y mucho más difíciles que éste y resolverlos eficientemente, no encontraran la manera de organizar ellos mismos su seguro mutuo, francamente, sería el caso de

creer que el comercio está entregado en manos de gentes que no entiende sus propios intereses, cosa que yo no admito, porque tengo por los comerciantes honestos y dignos del país el más alto respeto, tanto por su capacidad y espíritu de progreso, como por los propósitos de bien social que los anima.

Tales son las observaciones de orden general que he tenido la obligación de decir a la Honorable Cámara. Espero el debate en particular; sé que si son objetados los artículos del despacho, hay miembros de la comisión y el autor del proyecto, dispuestos a aportar todos los elementos de juicio necesarios para convencer a los señores diputados de su bondad.

Y ahora, señor presidente, yo espero que este Parlamento no ha de cerrar sus sesiones del presente año sin dar esta ley de justicia, de orden, de seguridad, que redundará en provecho de la Nación misma, porque nunca se trabaja con más ahínco que cuando se tiene alguna seguridad en la vida.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos*)

Sr. Colombres. — Pido la palabra.

Voy a decir muy breves palabras, señor presidente, después de las que se han pronunciado por el miembro informante de la comisión y por el autor del proyecto.

Los empleados de comercio se encuentran actualmente sin ninguna ley que los proteja en sus derechos. Su situación se halla regulada exclusivamente por cuatro artículos del Código y dentro de éstos especialmente por el artículo 157.

Se hacía, pues, necesaria una ley que contemple la situación de esta masa enorme de trabajadores. Así lo hemos entendido los diputados demócratas progresistas, y ya en el programa de la Alianza contemplábamos este problema y adelantábamos la necesidad de que se dictara la ley que lo solucionara.

Nuestro Código de Comercio es ya viejo; tiene más de cincuenta años de

vida y por lo tanto no puede contemplar los múltiples problemas que la vida moderna y la intensificación del comercio han venido a crear, siendo por lo tanto obligación del Congreso dictar la ley que lo modernice y lo ponga al día para solucionar los verdaderos problemas que las realidades sociales crean.

Los empleados de comercio hoy día se encuentran totalmente desamparados. La única protección que tienen es el mes de sueldo, en caso de despido, al cual tienen derecho, cualquiera sea el número de años que hayan trabajado; y es así cómo empleados que han estado durante veinte años al servicio de una empresa, se ven de la noche a la mañana en la calle, sin ningún derecho y abocados al grave problema que la desocupación les crea. Es la situación que hemos tenido ocasión de ver agravada en esta época por la intensa crisis económica que afecta al país.

Compañías y sociedades que durante muchos años han obtenido utilidades, al menor amago de contraste no han tenido la solidaridad de ayudar a ese personal que las acompañó en los años de bonanza, despidiéndolo sin contemplación, en lugar de conservarlo para ayudar a pasar el mal trance que está atravesando la República.

La ley que se propone no es, por otra parte, una novedad. Todas las legislaciones modernas contemplan la situación del empleado con respecto al patrón. El Código suizo de las obligaciones, que legisla el contrato de trabajo, la ley italiana, la ley peruana, la ley boliviana contemplan esa situación, así como Brasil, que tienen legislación sobre el particular.

La comisión ha hecho un estudio completo del asunto que está contenido en el despacho que se encuentra a la consideración de la Cámara. Creemos, además, que debe contemplarse también el actual momento de crisis por que atraviesa el comercio, para no dictar sanciones que puedan resultar exageradas e inaplicables. Dentro de este concepto, el sector demócrata progre-

sista formulará algunas observaciones cuando llegue la oportunidad de discutirlo en particular.

Queremos que la ley que se sancione armonice los intereses encontrados de patrones y obreros; y que venga la ley que proteja al más débil, al que se encuentra en inferioridad de condiciones. El progreso del comercio saldrá de la colaboración de ambas fuerzas, de que se contemple con un espíritu de justicia la situación de unos y otros, y en esa forma, cuando el empleado se vea amparado en sus derechos, el comercio tendrá en esa gran masa un eficaz colaborador. Es la propia idea de todo comerciante inteligente que ha evolucionado, que participa a su personal en las utilidades, buscando precisamente mejorar su situación económica porque tendrá un colaborador más eficaz cuando este empleado se encuentre en una situación económica tranquila, desahogada y trabajo seguro de que no podrá quedar en la miseria de un día para otro. Esta ley vendrá a dar la armonía necesaria al progreso del comercio.

De modo, pues, que en nombre del sector demócrata progresista nos adherimos al fin que se persigue con el dictado de esta ley y nos reservamos hacer en el debate en particular algunas observaciones que no vendrán sino a mejorar el proyecto y, sobre todo, a facilitar su sanción.

Nada más.

Sr. Ruggieri. — Pido la palabra.

No era mi propósito hablar, en general, sobre este asunto. Confiábamos en la palabra del miembro informante de la comisión, que ha cumplido, con singular eficacia, el mandato que le confiáramos los diputados que la integran, refutando todas las objeciones que han llovido sobre el despacho, lanzadas por entidades patronales que han dado, en esta oportunidad, la nota aguda de su incomprensión y de su egoísmo.

Los ataques de ayer, cotizados a alto precio, en las columnas de los diarios grandes, me imponen una nueva obligación. Debo rectificar mi primitivo

propósito y contestar, en términos generales, algunos de los aspectos más gruesos de esas objeciones.

Digamos ante todo, señor presidente, y como comentario preliminar, que esta iniciativa es de reparación y de justicia. Es un homenaje merecido, aunque modesto, que rinde el Congreso de la Nación a una parte numerosa de la clase trabajadora argentina. Si algo puede no conformar nuestra conciencia, es la imposibilidad de contemplar en este despacho de reformas a la ley comercial, a todos los trabajadores del país.

No es un proyecto de expoliación, ni siquiera inspirado en los intereses de una sola clase social, sino de justicia; elaborado con mesura, aunque con la necesaria precisión y firmeza para asegurar su cumplimiento.

Los empleadores, — y ojalá tengan la ductilidad necesaria para entenderlo — han de encontrar en este proyecto un incentivo para organizar sus propias cajas de previsión, para abandonar su empirismo mercantil, que considera al personal que trabaja a su servicio como una simple mercancía. Es la afirmación, este proyecto, de la doctrina que ve en el personal de empleados y obreros el complemento indispensable de toda empresa comercial, el factor humano, físico, intelectual y moral, sin el cual, señores diputados, no hay oro para las cajas, no hay intereses para los capitales, ni existen reservas económicas para el porvenir. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

Si la sanción de esta ley, señor presidente, es un deber del Congreso argentino, si se impone por efecto incoercible de la base democrática de su representación, más deber tenemos nosotros, como diputados del partido auténticamente socialista y obrero, de defenderla con la ciencia y la conciencia que nos dan los objetivos renovadores de nuestra orientación social y política.

Nada hay improvisado en esta materia, señores diputados. Ya lo ha hecho notar el miembro informante de la comisión. El preaviso de cesantía, la compensación en los casos de accidentes o

enfermedades inculpables, las vacaciones pagas, las indemnizaciones por despido, variables según la antigüedad en el servicio, son instituciones de derecho definitivamente incorporadas a la legislación de todos los países.

En los Parlamentos se ha promovido este nuevo derecho, o se ha defendido, por representantes de todos los sectores políticos. Yo evoco, para demostrarlo — y lo hago con un sentimiento de profundo y sincero respeto — el esfuerzo que realizaron en este terreno, en Italia, personalidades de tan firme envergadura política como Luis Luzzati, Victorio Orlando, Felipe Turati y otros de igual jerarquía. Sus iniciativas en el Parlamento italiano, apoyadas luego por las grandes organizaciones nacionales de empleados y obreros del comercio y de las sociedades no comerciales — porque en Italia están comprendidos en los beneficios de la ley los empleados de las corporaciones civiles, cuya situación consideraremos nosotros en un nuevo proyecto — constituyen el antecedente teórico y parlamentario del decreto-ley de 1924, que ha recordado el señor diputado Courel esta tarde señalándolo, con toda justicia, como uno de los más completos en esta materia.

Necesito hacerme cargo, ahora, de algunas de las objeciones más difundidas en estos últimos días contra este despacho. Sobre todo porque es muy probable que hayan herido la sensibilidad o la imaginación de algunos diputados ultraconservadores — es conveniente puntualizar que en esta Cámara hay diputados que tienen incrustado hasta la médula su rancio conservadorismo — las cifras abultadas que se barajan para demostrar — por supuesto que caprichosamente — que este proyecto de ley tendrá, entre otros efectos, en el caso de sancionarse, el de substraer a la economía argentina una apreciable cantidad de millones de pesos; olvidando, en el supuesto de que esas cifras tengan algún viso de exactitud, que en todo caso ese dinero se conservaría intacto para la economía nacional, que no se perdería de la circulación y que tomado en la proporción que corresponde a cada em-

pleador que despidе, se reduce, señor presidente, a sumas casi siempre insignificantes. Mucho más afecta, señores diputados, a la economía argentina, la enorme sangría anual que se produce con el pago al exterior de los excesos y despilfarros de la clase gobernante argentina.

En las publicaciones que ya he mencionado, de los diarios de ayer, se comienza con la presentación de pretendidas demostraciones numéricas, en las que la fantasía de sus autores ha hecho estragos notorios. A tal punto llega el exceso de los números, arbitrariamente manejados, y siempre sobre la base de situaciones de hecho inexistentes.

Entre otras afirmaciones erróneas, señores diputados, se destaca la de que este despacho contempla la situación de 2.640.000 empleados y obreros, de los cuales, según se dice, 880.000 serían empleados y 1.760.000 obreros. El diputado informante de la comisión ha evidenciado con exactitud que el despacho sólo se refiere — y no podía ser de otra manera — a los empleados y obreros que trabajan en las casas de comercio propiamente dichas, o a los que intervienen en la consumación del acto de comercio o de la operación mercantil, cualquiera sea el lugar o la naturaleza del trabajo que se realice en el proceso de esa operación.

Un cálculo realizado con mucha liberalidad, señor presidente, nos inclinaría a aceptar que pueden ser beneficiados por las disposiciones de este proyecto de ley unos 750.000 empleados y obreros del comercio.

Es exagerado, también, el promedio general que se ha dado de 220 pesos mensuales. En el comercio ocurre lo mismo que denuncian las planillas del presupuesto, respecto a los empleados públicos: un elevadísimo porcentaje corresponde a los de escasa remuneración, casi siempre inferior al valor de sus necesidades vitales. Sería un promedio aceptable el de 160 pesos mensuales en todo el país. Todos los señores diputados saben, y especialmente los del interior, que la mayoría de los empleados de comercio ganan mucho

menos; acepto esa suma a los fines de mi demostración, porque es el salario mínimo fijado en la ley de presupuesto para los empleados y obreros del Estado.

Admitamos, ahora, el cálculo de las entidades patronales, que fija en un cinco por ciento el personal que sufre las consecuencias de accidentes o enfermedades inculpables, y un promedio en ese personal de un mes de inhabilitación por año, en lugar de los dos que con notoria exageración calculan las publicaciones patronales.

En cuanto a las vacaciones pagas, se fija en esas publicaciones un promedio de 18 días al año para cada empleado. Es también evidente el error. Más lógico sería aceptar que, sobre 750.000 empleados del comercio, se precisaran las siguientes divisiones:

Sesenta mil con antigüedad menor de cinco años, con derecho, por lo tanto, a diez días de licencia anual; correspondería un salario de 53,30 por esas vacaciones, por supuesto que como promedio, lo que daría un monto total de 31.880.000 pesos al año.

Cien mil empleados con más de cinco y menos de diez años de antigüedad, quince días de licencia, promedio de 80 pesos de sueldo por el medio mes de licencia, total 8.000.000 pesos.

Cuarenta mil empleados con más de diez y menos de veinte años de antigüedad, veinte días de licencia, con sueldo de 106,60 pesos, total 4.264.000 pesos.

Y 10.000 empleados con más de veinte años de antigüedad, treinta días de licencia, promedio de 160 pesos mensuales, total 1.600.000 pesos al año.

El total de salarios y sueldos durante el tiempo de vacaciones, sería de 45.744.000 pesos al año.

Sr. Dickmann (E.). — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Ruggieri. — ¡Cómo no!

Sr. Dickmann (E.). — Hay que advertir que, dentro de ese número enorme de empleados, muchos ya gozan de las vacaciones pagas; grandes empresas dan las vacaciones pagas, y el señor diputado Ruggieri es tan generoso en sus cálculos, que calcula que

siempre se reemplaza el personal, cuando pequeñas empresas que dan vacaciones no reemplazan el personal, sino que simplemente recargan con un poco de tarea al personal que queda.

Sr. Ruggieri. — Es exacto. Oportunamente me ocuparé de ese aspecto del asunto, señor diputado.

En las críticas de los empleadores se abultan las indemnizaciones por falta de preaviso, siendo que ellas no deben figurar en los cálculos, ya que el propósito del legislador es hacer efectivo el aviso previo para la cesantía, evitándose de esa manera el pago de las indemnizaciones.

En el extraordinario cuadro estadístico que se reproduce en las publicaciones de ayer, se confiesa paladinamente, echando un borrón de mala fe sobre todo el comercio argentino, que en los 44.000 casos de despido que se calculan por año, no habría un solo comerciante que cumpliera con la obligación legal del preaviso.

No obstante representar en esta banca los intereses de la clase trabajadora argentina, tengo más fe en la honestidad de los comerciantes de este país que la propia entidad que dice representar sus necesidades, sus aspiraciones y sus intereses. Y por eso supongo que no habrá un solo empleador que deje de cumplir con la obligación del preaviso y que, en consecuencia, ninguno ha de caer en la obligación de pagar las indemnizaciones que fija este proyecto para los casos de incumplimiento de la ley.

¿Es acaso una cosa tan dura para el empleador avisar con anticipación el despido, o el término del contrato de empleo? ¿Es posible — siempre según los cálculos y previsiones de las entidades patronales a que me he referido — que el comercio prefiera violar la ley pagando alrededor de catorce millones de pesos por año, antes que respetar el término del preaviso y no pagar un solo centavo en concepto de indemnización? ¡Misterios de la teología capitalista, señor presidente, que no pueden merecer un minuto más de consideración!

La indemnización por falta de preaviso, señores diputados, es una multa. Yo aplico en esta materia el criterio del Estado con respecto a sus cálculos de recursos: en éstos no entran en juego las multas que puedan imponerse por falta de pago, en tiempo normal o legal, de los gravámenes fiscales.

Por último, se han calculado, sobre la base del despido anual de un 5 % del personal de empleados y obreros, y con un promedio de antigüedad de 10 años, las indemnizaciones que corresponden a las cesantías, variables según antigüedad en el servicio. La fantasía, en este capítulo de las objeciones, toca los límites del delirio, ya que el despacho sólo computa una antigüedad máxima de 10 años, anterior a la sanción de la ley. Es inadmisibles, entonces, fijar como promedio de antigüedad en los empleados despedidos el primer año, el máximo de 10 que establece el proyecto.

Según informaciones fidedignas, que he recogido en las casas comerciales que tienen más personal estable en la capital de la República, el promedio de antigüedad nunca puede exceder de cuatro años. Al lado de mil empleados con una antigüedad no mayor de tres años, no llegan a doscientos los que tienen entre cuatro y ocho años de antigüedad en el servicio.

Las cifras, entonces, quedarían reducidas a las siguientes:

El 5 % de 750.000 empleados indemnizados por accidentes o enfermedades inculpables, con un promedio de salario o sueldo mensual de 160 pesos, seis millones de pesos al año.

Sueldos y salarios correspondientes a las vacaciones pagas, 45.744.000 pesos.

El 5 % de 750.000 empleados indemnizados por despido, con un promedio de antigüedad de 4 años y, por lo tanto, con derecho a 4 medios sueldos en concepto de indemnización, 12.000.000 de pesos al año.

Estas cifras parciales suman escasamente 63.744.000 pesos, que, insisto, constituyen un cálculo realizado con mucha liberalidad y que contrasta con el realmente fantástico de cerca

500.000.000 de pesos que se ofrece prodigamente en las publicaciones de ayer.

La suma que he dado a la Cámara merece otros comentarios.

Los 45.000.000 de pesos que corresponden a los sueldos de períodos de licencia anual, pueden reducirse a cero, porque la seguridad o certeza del descanso anual, y el mismo descanso, señor presidente, a quien me dirijo también en su calidad de médico higienista, seguro de que corroborará el aserto, acrecienta la producción, el rendimiento del empleado, traduciéndose ese aumento en valores que no creo puedan ser mucho más bajos que el monto de lo que deba pagarse por las vacaciones anuales. En esta materia es aplicable la doctrina económica de las ventajas de las jornadas cortas, que todos los teóricos y prácticos de la racionalización del trabajo demuestran concluyentemente.

Las indemnizaciones por accidentes y enfermedades inculpables, y las que corresponden a los derechohabientes por fallecimiento del empleado, pueden evitarse con pólizas o contratos de seguro que aceptan todas las compañías que operan en ese rubro.

¿A qué queda reducida, entonces, la astronómica suma de millones de pesos que juegan en las costosas publicaciones de los grandes diarios de la Capital?

Obsérvese, además, lo siguiente. Presumo que durante los primeros años de aplicación de la ley dejen de cumplirse las obligaciones que el despacho establece, en un 20 por ciento. Soy optimista al admitir el cumplimiento de la ley en el 80 por ciento de los casos. No sé si lo será tanto el señor ministro de hacienda con respecto a los impuestos que puede cobrar el fisco nacional. El monto total de lo que se pagaría, incluyendo el valor de los sueldos por períodos de vacaciones, que en puridad de verdad no deberían computarse, sería aproximadamente de 50.000.000 de pesos. ¿Y qué representa esta suma en el volumen de las transacciones comerciales? Si se admite un volumen de 20.000.000.000 de pesos anuales — y

tomo como base para aceptar esta cantidad los cálculos que se han tenido en cuenta para proyectar el impuesto a las transacciones — llegamos a la conclusión, irrefutable, de que el pago de todas las indemnizaciones que se proyectan en esta ley impondrá una erogación que no excede del 2 y medio por mil de las operaciones efectivas de todos los negocios; mucho menos que el porcentaje establecido para el impuesto a las transacciones, que es, como saben los señores diputados, del 5 por mil, aparte de la sobretasa del 1 por mil para las transacciones sobre armas, joyas, pieles de lujo, cuadros, objetos de adorno, automóviles, alfombras, caballos de carrera, etcétera.

Llego, pues, a esta conclusión, que sólo un sentimiento inhumano, mezquino, antipatriótico y antinacionalista podría encontrar refutable: que en este Congreso no podría hablarse seriamente, con algún fundamento, contra esta iniciativa por las cargas que impone al comercio, después de haber votado este mismo Congreso un rosario de gravámenes fiscales que pesan sobre el comercio y la industria de la Nación, y de los cuales uno sólo, el que se aplica a las transacciones, percibido con regularidad, representa una carga superior en un cien por ciento a la que supone la sanción de este proyecto de ley.

Creo haber desmontado al monstruo financiero que se había fabricado para combatir el despacho de la comisión.

Paso a considerar, ahora, uno de los aspectos jurídicos que se han rozado en las impugnaciones conocidas, aunque esto, en realidad, correspondería a la discusión en particular.

Se ha atacado este proyecto porque sanciona, según se dice, el principio de la retroactividad, en pugna con disposiciones del Código Civil. Y se afila este argumento para combatir la computación de una antigüedad no mayor de diez años, anterior a la sanción de la ley, establecida para las indemnizaciones por despido, ya que para los plazos del preaviso, como para los relativos a la conservación del empleo,

en los casos de accidentes o enfermedades inculpables, y para el término de las vacaciones pagas, se computa sin ninguna limitación.

Sobre el punto observado, afirmo, en primer término, que no existe tal retroactividad y que si ésta fuera necesaria para asegurar el beneficio a los empleados, el Congreso puede y debe votarla. La retroactividad de la ley — entiéndase bien — no es un principio constitucional; la crea o la niega el Congreso en uso de sus facultades de poder legislador. Es así cómo ha incorporado el principio, en términos generales, al Código Civil con la reserva de su inaplicabilidad para las leyes de orden público. Y en este caso no puede hablarse de retroactividad porque no se afecta ningún derecho adquirido de los empleadores. Si hay algo adquirido, definitivamente, y que debe respetarse, es la antigüedad del empleado en el servicio.

La comisión, considerando la situación actual del comercio argentino, ha introducido una restricción al beneficio de los empleados, que en otras circunstancias no se habría explicado: la restricción de los diez años de antigüedad.

El empleador no ha adquirido el derecho de no pagar indemnización en la medida que determinen las antigüedades en el servicio, en los casos de despido posteriores a la sanción de la ley. En todo caso, podrían alegar los empleadores un derecho en expectativa, el de no pagar a sus empleados y obreros indemnización por despidos futuros; pero en estos casos no rige, y este es un concepto jurídico elemental, el principio de la irretroactividad.

No necesito desenvolver esta teoría jurídica de la irretroactividad de la ley, ampliamente expuesta por todos los comentaristas argentinos, en términos tan claros y precisos que no admiten la menor duda en su interpretación. El Código Civil argentino aclara estas cuestiones en forma categórica. Más aun; el artículo 4.045 del mismo ha afirmado también que las leyes nuevas deben aplicarse aun cuan-

do priven a los particulares de facultades que les eran propias y que aún no hubiesen ejercido o que no hubiesen producido efecto alguno. Planiol, el reputado jurisculto francés, ha hecho una síntesis admirable de la doctrina aplicable en esta materia. «La ley es retroactiva — ha dicho — cuando ella actúa sobre el pasado, sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, sea para modificar o suprimir los efectos de un derecho ya realizado; fuera de esto, no hay retroactividad, y la ley puede modificar los efectos futuros de hechos o actos anteriores sin ser retroactiva.»

La retroactividad existe, en efecto, en el último artículo del proyecto, cuando establece que sus disposiciones se declaran de orden público y se aplicarán a los casos de despido ocurridos desde el 1º de Agosto de 1932; vale decir, que contempla la posibilidad de su aplicación a despidos anteriores a la sanción de la ley.

Pero, aparte de que el Congreso, como acabo de demostrarlo, puede imponer expresamente esa retroactividad, ella se explica por dos motivos. Uno de orden general: esta es una ley de previsión, de orden público, contra la cual no podría invocarse el principio teórico de la irretroactividad; el otro de orden circunstancial, que se robustece después de las objeciones conocidas: porque sólo así podrá combatirse, con éxito, la amenaza de eludir el cumplimiento de la ley; amenaza que se corporizaría con el despido en masa de los empleados y obreros antes de la sanción de la misma.

Este artículo previsor de la comisión ha tenido ya sus efectos saludables: ha abortado el propósito, de malos empleadores, de despedir desde ahora, sin ninguna razón legal, a sus actuales empleados.

Termino, señor presidente. El despacho lleva la firma de todos los miembros de la comisión. Reduce — y debo adelantarme a confesar que en una proporción apreciable — los beneficios que establecen los proyectos primitivos. Por eso tenemos el derecho

de afirmar, sin ninguna jactancia, que este despacho es un modelo de discreción. Lo que más se resiste en él, por lo que resulta de las observaciones más difundidas, es la precisión con que hemos tratado de impedir que se burlen los propósitos del legislador, tarea a la que son tan propensos algunos de los que estarán obligados al pago de las indemnizaciones que se proyectan. La jurisprudencia, señor presidente, resolviendo casos que traducen esa propensión, nos ha enseñado bastante; nosotros hemos cumplido con el deber de aprovecharla.

No encierra el proyecto, subrayo, una carga excepcional para nuestro comercio, ni introduce reglas jurídicas que choquen demasiado con principios fundamentales del derecho tradicional argentino. Constituye una nueva etapa de nuestra evolución jurídica, etapa que, aceptada por el Congreso, lo prestigiarán ante el país, cuyas corrientes profundamente democráticas reclaman con urgencia soluciones de equidad como la que este despacho propicia.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos*).

Sr. Repetto. — Pido la palabra.

Señor presidente: la Cámara tiene a su consideración un proyecto de ley humano, necesario y prudente.

Es inútil, señores diputados de la derecha, que acogen este despacho con una ausencia casi unánime del recinto, es inútil resistir la presión de los tiempos, y ello resulta incomprensible cuando, como en el caso presente, el legislador proyectista se circunscribe dentro de límites y de normas que no pueden ser más racionales ni más prudentes.

Yo he dicho recién que es inútil querer eludir o escapar a la presión de los tiempos. Por todos los caminos y aun por los más opuestos, llega la legislación moderna de todos los países a las mismas conclusiones. En el debate de esta tarde hemos oído proclamar esta verdad sorprendente: que la mejor ley sobre la materia es la que ha dado el gobierno italiano. De manera que este hecho debería bastar por sí sólo para permeabilizar un poco algunas cabezas

y hacer más plástica la materia mental de algunos señores diputados, porque esto está demostrando que por cualquier camino, por el camino democrático, libre, que nosotros defendemos, o por el otro, el dictatorial o despótico, por cualquiera de ellos, será siempre necesario rendir homenaje a las exigencias ineludibles del progreso humano; por el camino del fascismo o por el de la democracia, se llegará necesariamente a la misma conclusión: que debe mejorarse la condición de trabajo y de vida del pueblo.

He dicho que esta es una ley prudente — es bueno recalcarlo —, porque en esta clase de iniciativas estamos ya acostumbrados a vernos en presencia de exageraciones que sorprenden y a veces apenan por lo absurdo y por lo fantástico de sus pretensiones.

En el orden de la legislación que tiende a defender el trabajo del hombre, han aparecido algunas veces iniciativas realmente excesivas y hasta inadmisibles. Afortunadamente no es este el caso. Yo recuerdo haber leído hace poco la tentativa que se hizo en Francia para reglamentar el servicio de los anuncios de pedidos de trabajo en los periódicos. Se proyectó una ley por la cual toda empresa anunciadora, los periódicos, las revistas y las organizaciones de otra índole, pero susceptibles de ser utilizadas para el mismo fin, cuyos anuncios no hubieran satisfecho el deseo del anunciador, es decir, todo anuncio de pedido de trabajo que no hubiera procurado al anunciador la posibilidad de satisfacerlo, debía ser indemnizado por la devolución del importe pagado. Se equiparaba el anuncio de prensa con la obra o el trabajo que realizan las agencias de colocaciones. Estas perciben comisión del solicitante cuando consiguen procurarle trabajo; si no lo consiguen, las agencias no perciben comisión alguna. Ocurre otra cosa con los periódicos que anuncian pedidos de trabajo. Si el que acude al domicilio del que ofrece trabajo, no lo obtiene, las empresas periodísticas, que han recibido ya el importe de la misma, no tolerarían que se ejerciera sobre

ellas el derecho de devolución. Esas son leyes de tipo realmente demagógico, como lo fueron algunas que pasaron por esta Cámara y que la diputación socialista se ha hecho siempre el deber y el honor de rechazar.

Digo estas palabras, porque voy a señalar un olvido en que me parece se ha incurrido al proyectar esta ley, olvido que a mi juicio podría ser subsanado en la discusión en particular. Espero que así se hará. Me refiero, señor presidente, a esos hombres tan conocidos en el comercio que se denominan «viajantes de comercio». Son hombres que llevan una vida peculiar, que se consagran a una tarea constructiva, que toman muchas veces el corretaje de un artículo que recién sale al comercio, de un artículo absolutamente desconocido, y ellos por medio de una obra paciente, tenaz, haciendo verdaderos prodigios de persuasión, consiguen realizar lo que en el lenguaje de esa clase de actividades se llama «hacer una marca».

Hay muchos productos muy difundidos, muy conocidos, que se consumen en gran cantidad, que sólo han llegado a disfrutar de esa situación de privilegio, por la acción efficacísima de esos agentes oscuros que recorren constantemente el país sometiendo a las molestias inherentes a esta clase de actividades, circulando por trenes que a menudo carecen de todo confort, viviendo y pernoctando en lugares donde frecuentemente faltan las condiciones higiénicas más esenciales. Esos hombres, señor presidente, consagran todos sus esfuerzos a esa labor y consiguen muchas veces «hacer una marca», hacer triunfar un producto industrial, imponerlo al consumo de toda una gran zona del interior de la República.

¿Cuál es la situación de esos hombres cuando son despedidos? ¿Podemos considerar que el viajante de comercio es un simple empleado, un dependiente de comercio? ¿Podemos equiparar la labor de este hombre con la que realiza el empleado que atiende al público, que toma directamente los artículos de

los estantes, que los ofrece al cliente y que tiene con éste los tratos corrientes, inevitables que impone una operación de ese género? ¿O hay en el viajante de comercio un hombre que desempeña una actividad íntimamente vinculada, no sólo a la prosperidad del negocio en el momento en que él lo toma, sino al desarrollo progresivo de ese comercio? Si el hombre que «hace una marca» por su esfuerzo personal, trabajando durante muchos años, es alguna vez despedido, la conciencia de quien lo despide no podrá considerarse satisfecha, no podrá considerarse tranquila con esta simple indemnización del 50 por ciento del sueldo mensual por cada año que hubiera trabajado. Esa conciencia sólo se sentirá tranquila después de haber entregado a ese empleado una parte proporcional del fruto del esfuerzo que él ha aplicado a esa empresa, para llevarla al estado de prosperidad en que la deja.

Yo no planteo una cuestión teórica, señor presidente, sino una cuestión práctica; es una cuestión sentida, una cuestión que afecta a intereses conscientes. Quiero decir que es una cuestión de la cual se han apercibido los mismos interesados, que han venido alguna vez a nuestro partido y a nuestro diario a invitarnos a amparar un movimiento de justicia en este sentido.

Ha ocurrido, ocurre actualmente este hecho que yo lo reputo y lo califico de vituperable: algunos industriales o comerciantes obtienen, por el esfuerzo de estos hombres, la imposición, la divulgación de una marca; y, obtenido este resultado, consideran que desde ese momento pueden prescindir en absoluto del auxiliar eficaz que ha llevado la marca a esa altura de éxito y se desprenden del viajante de comercio, lo eliminan, lo consideran ya innecesario y creen lícito, por medio de su supresión, realizar una economía sensible. Y esos viajantes de comercio así despedidos, son precisamente los que han venido a golpear a nuestras puertas, pidiéndonos que nos intereseamos por ellos, que tratemos de incorporar,

cuando se discuta esta ley o — si esto no fuera prácticamente posible — tratemos de proyectar una ley especial, a fin de salvar esta situación y de asegurar a los hombres que han trabajado en esas condiciones la indemnización legítima que les corresponde.

Creo que esta ley no dejaría de ser prudente, no dejaría de ser la ley discreta que todos nosotros queremos imponer al comercio, sin excedernos de lo que el comercio puede soportar en un momento dado — porque esa debe ser también norma y principio inquebrantable de un legislador: no ir más allá en la imposición de lo que puede soportar el elemento incidido — creo, decía, que no nos excederíamos y sancionaríamos siempre una ley prudente y discreta, si en alguna forma incorporaríamos a este despacho una disposición que contemplara la situación que yo he presentado a la Honorable Cámara, para que lleve una sanción de justicia a esos otros trabajadores del comercio que, sin confundirse totalmente con los dependientes y factores, son igualmente resortes importantes y, como he dicho, en muchos casos resortes decisivos en la prosperidad y en el desarrollo de una empresa.

Dejo así señalada mi opinión y espero que tal vez en la discusión en particular será llegada la oportunidad de proponer el artículo pertinente para salvar esto que yo considero una omisión involuntaria de la comisión que ha despachado este proyecto.

Sr. Courel. — Pido la palabra.

Sr. Dickmann (A.). — Si me permite, deseo hacer una breve aclaración.

Quiero hacer público, tanto para mis colegas socialistas como para los demás diputados, que el aspecto señalado por el señor diputado por la Capital está siendo estudiado por el señor diputado Moret y el que habla, en una ley especial, porque no hemos encontrado la manera de estructurarlo dentro de los artículos del código que se está por modificar. Desde luego, agradecemos la contribución del señor diputado, que nos ha de estimular para despachar más rápidamente nuestra iniciativa.

Sr. Repetto. — El señor miembro informante nos iba a informar...

Sr. Courel. — Después de las palabras del señor diputado Dickmann, no tengo nada más que decir.

Sr. Presidente (Cafferata). — Se va a votar en general el despacho de la Comisión de Legislación General.

—Resulta afirmativa general.

Sr. Dickmann (E.). — Hay unanimidad.

Sr. Prosecretario (Cullen). — Afirmativa general, sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Cafferata). — En discusión en particular.

—Se lee el artículo 1º.

—Después de llamar para formar quórum:

Sr. Presidente (Cafferata). — No habiendo número, queda levantada la sesión.

—Era la hora 18 y 20.